



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

**T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2
A CORUÑA**

SENTENCIA: 00237/2013

Procedimiento Ordinario Nº 4078/2012

EN NOMBRE DEL REY

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la siguiente

NOTIFICADO 24/04/13

SENTENCIA

Ilmos. Sres.

D. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA - PTE.

D. JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ

D^a. CRISTINA MARÍA PAZ EIROA

En la ciudad de A Coruña, a veintisiete de marzo de dos mil trece.

En el recurso contencioso-administrativo que con el Nº 4078/12 pende de resolución en esta Sala, interpuesto por la **Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza (FORGA)**, representada por **D. José Amenedo Martínez** y dirigida por **D^a. Alba Arrizado Mosqueira**, contra la Resolución de 25-11-2011 de la Consellería de Traballo e Benestar. Es parte como demandada la **Consellería de Traballo e Benestar**, representada y dirigida por la **Letrada de la Xunta de Galicia**. La cuantía del recurso es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se mandó que por la parte recurrente se dedujese demanda, lo que realizó a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho pertinentes, solicitó que se dictase sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto.

SEGUNDO: Conferido traslado de la demanda a la Administración demandada para contestación, se presentó escrito de oposición con los hechos y fundamentos de derecho



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

que estimó procedentes, y se suplicó que se dictase sentencia desestimando el recurso.

TERCERO: Una vez practicadas, con el resultado que consta en autos, las pruebas admitidas, y cumplimentado el trámite de conclusiones, por providencia de 6-3-13 se señaló para votación y deliberación el día 21-3-13. La parte actora presentó copia de una sentencia dictada por la Sección Primera de esta Sala, y por providencia de 18-3-se acordó su unión a los autos con traslado a la parte demandada.

CUARTO: En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente el Magistrado Sr. Méndez Barrera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la Resolución de la Consellería de Trabajo e Benestar de 25-11-2011, dictada en el expediente TF301K 2011/248-0, que no concedió los cursos de formación profesional para el empleo solicitados por la entidad actora.

SEGUNDO: La entidad actora interesa en su demanda que se declare la nulidad o, subsidiariamente, la anulabilidad de la resolución impugnada, así como que se reconozca su derecho a obtener las ayudas solicitadas. Esta pretensión se funda, por una parte, en la ausencia de motivación y la falta de causa de la resolución desestimatoria de lo solicitado; por otra, en la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, al enmarcarse dicha resolución en la política seguida por la Administración, desde el año 2009, de restringir el acceso de la demandante a ciertas subvenciones públicas, puesta de manifiesto, según la actora, en que, pese a haber aumentado los fondos dedicados a la formación y fomento del empleo, disminuyeron las ayudas concedidas a la recurrente; y en la denegación, en los tres últimos ejercicios y por motivos presupuestarios, de sus solicitudes para programas formativos no ligados a la representación sindical.

TERCERO: La Administración demandada se opone las pretensiones de la actora, y argumenta, en cuanto a la primera causa de nulidad invocada en la demanda, que el procedimiento derivado de la Orden de 30-12-2011 era de concurrencia competitiva; que tenían que seguirse los trámites establecidos en el artículo 4 de dicha Orden; que el cumplimiento de los requisitos debía exigirse rigurosamente en razón de la limitación presupuestaria; que el instituto de las subvenciones se inscribe dentro de la potestad discrecional de la Administración, pero que una vez que la subvención ha sido



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

anunciada y regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la actividad reglada, que debe atenerse a esa normativa; y que no se denuncia una falta total de procedimiento. Asimismo invoca la Administración una sentencia de la Audiencia Nacional sobre la motivación de las resoluciones de procedimientos de concurrencia competitiva. En cuanto a la segunda de las causas de nulidad aducidas por la parte actora, la Administración niega la discriminación denunciada, y argumenta que las dotaciones presupuestarias para las medidas activas de empleo se han reducido a la mitad para el período 2011-2012 en relación con el 2008-2009, y que la recurrente recibió en el año 2011 ayudas para otras acciones dentro de los programas integrados de empleo.

CUARTO: Tiene que ser aceptada la concurrencia de la primera de las causas de nulidad alegadas en la demanda. La solicitud de la parte actora se refería a la vía de programación prevista en el artículo 15.2 de la Orden. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 4.5, el procedimiento a seguir habría de ser el abreviado previsto en el artículo 22 de la Ley 9/2007; es decir, la decisión del órgano concedente tendría que ser precedida únicamente por la propuesta del órgano instructor, que debería comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos para acceder a la solicitud. El que la solicitud de la actora se refiriese a la vía de programación prevista en el artículo 15.2 de la Orden determinaba, según su artículo 1.2, que no rigiese el régimen de concurrencia competitiva. De los 239 folios que componen el expediente administrativo remitido solo 5 reflejan las actuaciones de la Administración, que comprenden, además de un listado de los recursos solicitados y los actos de comunicación, un folio con la propuesta de resolución y otro con la resolución. Una y otra realizan una reseña de la normativa aplicable, y tras ella dicen que teniendo en cuenta lo dispuesto en el art 4º de la Orden de 30-12-2011 y la disponibilidad presupuestaria, se propone y resuelve, respectivamente, no conceder los cursos de formación profesional solicitados por la demandante. Tanto la propuesta como la resolución carecen por completo de motivación, pues es imposible conocer tras su lectura las razones por las cuales se deniega lo solicitado por la actora, y la propuesta omite todo análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para conceder lo interesado por aquélla. Por ello existe en la actuación administrativa un defecto muy grave que produce indefensión en la interesada, pues no conoce las razones de la decisión administrativa y tal circunstancia le impide tratar de desvirtuarlas, por lo que procede acceder a la declaración de nulidad pretendida por la actora con fundamento en el examinado defecto de procedimiento.

QUINTO: En lo que se refiere a la segunda causa de nulidad alegada por la recurrente, es obvio que en la demanda no se podían concretar las circunstancias reveladoras de un tratamiento discriminatorio en relación con otros solicitantes



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

en igualdad de situación que la recurrente; pero una vez remitida por la Administración la abundante prueba documental que le fue solicitada a instancia de la actora en la fase de prueba, resultaba inexcusable que se hiciese un examen comparativo de lo decidido respecto de otras entidades para mostrar la discriminación que denuncia la recurrente, y esto no lo hace en su escrito de conclusiones. Por ello no puede estimarse acreditada la existencia de la discriminación denunciada. En definitiva, el recurso tiene que ser acogido con la declaración de nulidad de la resolución impugnada, aunque este pronunciamiento estimatorio no pueda extenderse a la declaración del derecho de la actora a la concesión de lo solicitado de la Administración, ya que ello supondría sustituir a la Administración en un examen del cumplimiento de los requisitos necesarios para ello que no realizó, y que tampoco ha sido planteado y discutido en este proceso, por lo que lo que ha de hacerse es determinar que la Administración tiene que decidir, con la debida motivación, sobre la solicitud de la actora.

SEXTO: No procede hacer imposición de las costas del recurso al ser estimado de forma parcial (artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional).

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S:

Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galiza (FORGA) contra la Resolución de la Consellería de Traballo e Benestar de 25-11-2011, dictada en el expediente TF301K 2011/248-0, que no concedió los cursos de formación profesional para el empleo solicitados por la entidad actora, y anulamos dicho acto por ser contrario a derecho, por lo que la Administración deberá decidir motivadamente sobre la solicitud de la recurrente. No se hace imposición de las costas del recurso.

Esta sentencia no es susceptible del recurso ordinario de casación del artículo 86 de la L.J.C.A. de 1998.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto con certificación y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

PUBLICACIÓN

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Magistrado Ponente D. José Antonio Méndez Barrera al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso-administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, de lo que yo, Secretaria, certifico.

